



Asamblea General

Distr. general
1 de abril de 2022
Español
Original: inglés

Septuagésimo sexto período de sesiones

Temas del programa 135 b) y 150

**Informes financieros y estados financieros
auditados e informes de la Junta de Auditores:
operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz**

**Aspectos administrativos y presupuestarios de la
financiación de las operaciones de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz**

Informe de la Junta de Auditores sobre las cuentas de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz e informe del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores relativas a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz correspondientes al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2021

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

I. Introducción

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado el informe de la Junta de Auditores sobre las cuentas de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz correspondiente al ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2021 ([A/76/5 \(Vol. II\)](#)). Durante su examen del informe, la Comisión Consultiva se comunicó a distancia con los miembros del Comité de Operaciones de Auditoría de la Junta de Auditores, los cuales proporcionaron información y aclaraciones complementarias, proceso que concluyó con las respuestas por escrito recibidas el 3 de febrero de 2022. La Comisión también se comunicó con representantes del Secretario General y examinó las conclusiones de la Junta en el contexto del correspondiente informe del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores ([A/76/723](#)). Los representantes proporcionaron información y aclaraciones complementarias, proceso que concluyó con las respuestas por escrito recibidas el 22 de marzo de 2022.



2. Las observaciones de la Comisión Consultiva respecto de algunas de las conclusiones de la Junta de Auditores figuran también en su informe relativo a las cuestiones transversales relacionadas con las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz ([A/76/760](#)) y en sus informes sobre las distintas misiones según corresponda.

3. En su informe, la Junta indica que auditó los cuarteles generales de las operaciones de mantenimiento de la paz, las 12 misiones en curso y las 34 terminadas, así como las seis cuentas para fines especiales. Durante el ejercicio 2020/21, a raíz de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la Junta auditó las operaciones de mantenimiento de la paz desde la Sede de Nueva York y desde el Centro Mundial de Servicios de Brindisi (Italia). Las auditorías de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, la liquidación de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y el Centro Regional de Servicios de Entebbe (Uganda) se realizaron desde el Centro Mundial de Servicios ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 2 y 4). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la posibilidad de auditar algunas operaciones de mantenimiento de la paz desde la Sede y el Centro Mundial de Servicios contribuyó a mitigar considerablemente los efectos negativos de las restricciones a los viajes. Por ejemplo, el Centro Mundial de Servicios estableció una conexión por video con las operaciones de mantenimiento de la paz que permitió a la Junta controlar a distancia las cámaras y los teléfonos móviles de los funcionarios de las Naciones Unidas en las misiones para inspeccionar las existencias y los elementos de propiedades, planta y equipo, además de tomar fotografías y grabar videos.

4. **La Comisión Consultiva encomia a la Junta de Auditores por la buena calidad que siguen teniendo sus informes pese a las dificultades causadas por las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, y reconoce la contribución del auditor principal de las operaciones de mantenimiento de la paz a lo largo de los años. Al tiempo que toma nota de las enseñanzas extraídas, la Comisión considera que la auditoría de las operaciones de mantenimiento de la paz se ha realizado a distancia de forma excepcional y confía en que la Junta pueda reanudar cuanto antes las auditorías sobre el terreno (véanse también [A/75/829](#), párr. 4, y [A/75/539](#), párr. 5).**

Cooperación entre la administración y la Junta de Auditores

5. En el informe de la Junta de Auditores se indica que esta fue la primera vez en seis años que la Secretaria General Adjunta de Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión envió un memorando interno a los jefes de las entidades solicitándoles que proporcionaran todos los comentarios y documentos justificativos que la Junta necesitara para poder evaluar el estado de la aplicación de las recomendaciones pendientes. La Junta observó que la administración había cumplido sus solicitudes en mayor grado que en ejercicios anteriores, lo que contribuyó al elevado número de recomendaciones aplicadas. La Junta reconoció los mayores esfuerzos realizados por la administración para aplicar las recomendaciones y proporcionar los documentos justificativos durante el período que abarca el informe en comparación con los ejercicios anteriores ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 10 y 12).

6. **La Comisión Consultiva recuerda su recomendación, refrendada por la Asamblea General en su resolución [74/249 B](#), de que el Secretario General coopere plenamente con la Junta de Auditores (véase también [A/74/806](#), párr. 22). La Comisión observa la mejora de la cooperación entre la Junta y la administración y**

anima a la administración a seguir colaborando con la Junta para facilitar la rápida aplicación de sus recomendaciones y fomentar una cultura de rendición de cuentas en la Organización (véase también [A/75/829](#), párr. 7).

Declaración de control interno

7. La Junta señala en su informe otro hecho positivo durante el período en cuestión: por primera vez, el Secretario General emitió una declaración sobre el control interno, en la que afirmaba que la Secretaría había funcionado con un sistema eficaz de control interno durante 2020. En la declaración se describían las responsabilidades y se exponían las cuestiones de control interno. Para preparar este documento, se pidió a todas las entidades de la Secretaría, incluidas las misiones de mantenimiento de la paz, que examinaran las matrices de control de riesgos, evaluaran los riesgos y controles pertinentes y rellenaran los cuestionarios de autoevaluación elaborados por la Sección de Control Interno a fin de determinar la existencia y el funcionamiento de los controles internos en cada entidad. La Junta examinó las matrices de control de riesgos y las autoevaluaciones de las operaciones de mantenimiento de la paz y recomendó, entre otras cosas, que la administración realizara análisis transversales y talleres con las misiones para mejorar los comentarios transmitidos a las misiones y el intercambio de experiencias entre ellas; examinara el número de controles clave en las matrices de control de riesgos para determinar las oportunidades de mejora en la declaración de control interno; y evaluara la introducción de una plataforma electrónica ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 36 a 42). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que aún había varias misiones que necesitaban reforzar sus controles internos en las esferas de los procesos logísticos, las adquisiciones de bajo valor y el desempeño y las competencias del personal. También se informó a la Comisión de que diversas partes de la evaluación del control interno podían tenerse en cuenta en la medición del desempeño, como el cumplimiento, la corrección de deficiencias y la mejora de los procesos. A juicio de la Junta, estos elementos podían incluirse en los pactos del personal superior.

8. **La Comisión Consultiva observa el aprecio de la Junta por la publicación de la declaración de control interno y por los progresos realizados por la Secretaría en el fortalecimiento del entorno de control ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 39).** La Comisión también considera la declaración de control interno en su informe más reciente sobre la rendición de cuentas ([A/76/728](#), párrafo 33).

II. Observaciones y recomendaciones de la Junta de Auditores correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2021

A. Principales observaciones y recomendaciones

Sinopsis de la situación financiera

9. La Junta indica que el presupuesto de mantenimiento de la paz aprobado para el ejercicio económico 2020/21 ascendía a 6.820 millones de dólares, lo que representa un aumento de 10 millones de dólares con respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Los gastos disminuyeron un 1,5 %, ya que pasaron de 6.710 millones de dólares en 2019/20 a 6.610 millones de dólares en 2020/21. En 2020/21 quedó sin utilizar una suma de 210 millones dólares, frente a 100 millones de dólares en 2019/20 ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 29). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el gasto había sido inferior al previsto principalmente debido al menor despliegue de todas las categorías de personal uniformado y al menor número de horas de vuelo derivado de

las restricciones a los viajes impuestas a raíz de la COVID-19. En 2020/21, las redistribuciones presupuestarias ascendieron a 163,03 millones de dólares (el 2,4 % del presupuesto inicial), frente a los 196,57 millones de dólares (el 2,9 % del presupuesto inicial) del ejercicio anterior (*ibid.*, párr. 32). Se pueden encontrar más detalles sobre las redistribuciones presupuestarias de las distintas misiones en el anexo II de los estados financieros (véase el cap. V) del informe de la Junta.

10. La Junta de Auditores destaca que la situación financiera variaba de una operación de mantenimiento de la paz a otra, particularmente en lo que respecta a la liquidez. Si bien el coeficiente de caja al 30 de junio de 2021 era superior o cercano a 1 en varias misiones y actividades de apoyo, en otras se aproximaba a 0. Se informó a la Junta de que la recurrente escasez de efectivo en la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo continuó en 2020/21, y la liquidez de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia (UNSOS) era muy baja. Estas tres misiones pidieron préstamos a la MINUSMA. La Junta observa que las cuotas atrasadas para las operaciones de mantenimiento de la paz aumentaron de 1.500 millones de dólares al 30 de junio de 2017 a 2.300 millones de dólares al 30 de junio de 2021 ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 33, y cap. IV, párr. 74). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que las cuotas pendientes de pago para la UNSOS ascendían a 69,5 millones de dólares al 30 de abril de 2021. También se informó a la Comisión de que la situación financiera general de las operaciones de mantenimiento de la paz al 30 de junio de 2021 era ligeramente mejor que la del ejercicio anterior; sin embargo, la liquidez siguió siendo el principal problema y el coeficiente de caja no mejoró.

Servicio de Actividades relativas a las Minas

11. En su informe, la Junta señala que el Servicio de Actividades relativas a las Minas contrata a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como asociado en la ejecución para casi todas las actividades relativas a las minas. Según el memorando de entendimiento entre la Secretaría y la UNOPS, el Servicio de Actividades relativas a las Minas, en general, debe pagar honorarios de gestión del 8,15 % a la UNOPS, lo que añade otro nivel de gastos generales, ya que la UNOPS contrata los servicios de terceros. La Junta indica que para 2020/21, el Servicio proporcionó a la UNOPS financiación por valor de 154,7 millones de dólares para las actividades relativas a las minas en las operaciones de mantenimiento de la paz, que fueron realizadas principalmente por contratistas externos. La Junta considera que sería más rentable que el Servicio de Actividades relativas a las Minas tuviera su propia función de pedidos ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 43, 44 y 46). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la División de Adquisiciones de la Sede y las secciones de adquisiciones de las misiones adquieren la mayor parte de los bienes para los servicios de actividades relativas a las minas. También se informó a la Comisión de que, en virtud del anexo 2 del memorando de entendimiento vigente, las misiones proporcionan, sin costo alguno para la UNOPS, los siguientes elementos: espacio de oficina o alojamiento para el personal; mobiliario y equipo de oficina; papelería y suministros; vehículos, mantenimiento y combustible en función de los derechos de la misión; transporte en los vuelos de las Naciones Unidas; servicios de comunicación, incluidos Internet, teléfono y comunicaciones por satélite; evacuaciones médicas; y explosivos.

12. En su informe anterior, la Junta había recomendado que la administración obtuviera un análisis independiente de la asociación entre el Servicio de Actividades relativas a las Minas y la UNOPS, y que en el próximo memorando de entendimiento incluyera nuevas estipulaciones para facilitar una mayor transparencia y garantizar un mejor uso de los recursos de la Secretaría ([A/75/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 175 y

176). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el memorando de entendimiento vigente se ha prorrogado hasta el 30 de abril de 2022. La negociación sobre el memorando de entendimiento revisado seguía en curso al 10 de marzo de 2022. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión de que los honorarios de la UNOPS formaban parte de la negociación. En cuanto a los cambios previstos, se informó a la Comisión de que se modificarían o añadirían cláusulas en el memorando de entendimiento revisado a fin de aportar mayor claridad en varias esferas, como el alcance, las funciones y responsabilidades, el marco regulatorio, los calendarios de pago, los requisitos de presentación de informes y los plazos correspondientes. Además, el memorando revisado debería abarcar todas las entidades de la Secretaría, incluidos el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

13. La Junta también señala en su informe que, siguiendo sus recomendaciones del período anterior, la administración había decidido transferir las plazas de Jefes del Programa de Acción contra las Minas de la UNOPS a la Secretaría. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que, como medida provisional, el Contralor había autorizado, con carácter excepcional, la creación de siete plazas de personal temporario general de Jefe del Programa de Acción contra las Minas hasta el 30 de junio de 2022. La Junta recomendó que la administración: a) definiera, en los acuerdos financieros con la UNOPS, las jerarquías y las relaciones jerárquicas entre la UNOPS y los Jefes del Programa de Acción contra las Minas; b) determinara qué categorías de bienes debían proporcionar las misiones a la UNOPS para los proyectos de acción contra las minas e integrara a los Jefes del Programa de Acción contra las Minas en la supervisión y gestión de los bienes de los proyectos; y c) especificara, en un documento de catálogo central, qué actividades quedaban comprendidas en el ámbito del Servicio de Actividades relativas a las Minas ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 51, 57 y 61). La administración no aceptó la recomendación de crear el catálogo central, ya que consideraba que las actividades relativas a las minas se recogían periódicamente en los informes del Secretario General al Consejo de Seguridad y en los informes sobre la ejecución del presupuesto presentados a la Asamblea General, mientras que el Servicio de Actividades relativas a las Minas realiza un seguimiento y una supervisión continuos de las actividades programáticas sobre el terreno. Según la administración, la elaboración de un catálogo no reforzaría la labor de seguimiento y supervisión que realiza el Servicio ([A/76/723](#), párr. 15).

14. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la recomendación de la Junta de que se especifiquen en un catálogo central las actividades del Servicio de Actividades relativas a las Minas y confía en que el memorando de entendimiento entre la Secretaría y la UNOPS se finalice rápidamente y en que se facilite a la Asamblea General información actualizada sobre esta cuestión, incluidos los honorarios de gestión pagados a la UNOPS, cuando esta examine el presente informe. La Comisión considera que es necesario que se aclaren diversos aspectos de la asociación entre el Servicio de Actividades relativas a las Minas y la UNOPS, incluida la función del Jefe del Programa de Acción contra las Minas, y que los servicios se presten a la UNOPS sin costo alguno. La Comisión examina además las cuestiones relacionadas con la prestación de servicios de actividades relativas a las minas en su informe sinóptico sobre las operaciones de mantenimiento de la paz ([A/76/760](#)).

Liquidación de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

15. En su informe, la Junta examina la liquidación de la UNAMID y señala los problemas relacionados con la delegación de autoridad, la falta de una política de recursos humanos para la reducción y la liquidación, y el pago de la prestación por peligrosidad y la indemnización por rescisión del nombramiento.

Delegación de autoridad

16. La Junta recordó que, en su resolución [2559 \(2020\)](#), el Consejo de Seguridad decidió poner fin al mandato de la UNAMID el 31 de diciembre de 2020. El jefe de misión de la UNAMID y Representante Especial Conjunto de la Unión Africana y las Naciones Unidas para Darfur dejó la misión el 31 de enero de 2021. El Secretario General nombró a un Subsecretario General (ubicado en la Sede) para que actuara como Oficial Encargado de la UNAMID desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2021. En una carta de fecha 28 de junio de 2021, el Oficial Encargado nombró al Director de Apoyo a la Misión de la UNAMID Oficial Encargado de la misión con carácter temporal desde el 1 de julio de 2021 hasta nuevo aviso. La Junta consideraba que: a) el personal superior dejó la misión prematuramente; b) el proceso de delegación de autoridad no se registraba adecuadamente porque, de conformidad con el párrafo 1.2 del boletín del Secretario General sobre la delegación de autoridad ([ST/SGB/2019/2](#)), todas las delegaciones de autoridad debían publicarse y gestionarse por medio del portal de delegación de autoridad; y c) el Director de Apoyo a la Misión actuó sin “autoridad de jefe de entidad”, ya que la UNAMID había dejado de existir como entidad el 1 de enero de 2021 ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 64 a 73).

17. Para remediar esta situación, la Junta recomendó que la administración: a) se asegurara de que la delegación de autoridad en los oficiales encargados fuera visible en el portal de delegación de autoridad; y b) definiera y codificara la delegación de autoridad para las decisiones administrativas sobre la gestión de los recursos, incluidos los recursos humanos, para todas las actividades de reducción y liquidación de una misión. La administración aceptó la recomendación. Sin embargo, al ser consultada, la administración citó la interpretación del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas de que la naturaleza jurídica de una entidad no terminaba al finalizar el mandato y que su naturaleza jurídica se mantenía hasta que la entidad se liquidara por completo. La administración tampoco estuvo de acuerdo con la observación de que no se podía delegar ninguna facultad fuera del portal, ya que en el párrafo 2.6 del documento [ST/SGB/2019/2](#) se hacía referencia a una delegación automática con carácter temporal para situaciones en las que hubiera un Oficial Encargado. La administración sostuvo que seguía una práctica sistemática que consistía en publicar una delegación en el portal solo cuando un Oficial Encargado era nombrado o aprobado por el Secretario General. No obstante, la administración indicó que el documento [ST/SGB/2019/2](#) se revisaría para aclarar las situaciones en las que se hubiera subdelegado la autoridad del Oficial Encargado (*ibid.*, párrs. 74 a 76). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que en el boletín revisado del Secretario General también se aclararía la condición jurídica de las entidades una vez finalizado su mandato.

18. **La Comisión Consultiva está de acuerdo con las recomendaciones de la Junta de Auditores sobre la delegación de autoridad. Observando que la finalidad de la delegación de autoridad es lograr la descentralización de la toma de decisiones, la Comisión considera que es necesario definir mejor la responsabilidad individual, en particular en los casos de corresponsabilidad entre la Sede y los lugares de destino sobre el terreno, sobre todo en los períodos de transición, como durante el establecimiento o la liquidación de las misiones sobre el terreno ([A/76/728](#), párr. 29).**

Falta de una política de recursos humanos para la reducción y liquidación de las misiones

19. La Junta recordó sus recomendaciones anteriores de que se conservara a los funcionarios hasta después de la fecha de liquidación de las misiones de mantenimiento de la paz para que ultimaran las tareas pendientes y de que se velara por que los jefes de las dependencias sobre el terreno permanecieran en sus puestos y mantuvieran la responsabilidad respecto del cierre de sus dependencias ([A/74/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 389, y [A/72/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 464). La Junta también recordó que en 2018 y 2019 el Secretario General afirmó ante la Asamblea General que el Departamento de Gestión había comenzado a elaborar una política de reducción de recursos humanos para toda la organización centrada en la reestructuración organizativa, que incluía sus efectos en el personal, y que estaba por finalizarse ([A/72/756](#), párr. 153, y [A/73/750](#), párr. 212). Al mes de marzo de 2022, la política no había sido promulgada ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 84 y 85).

20. A juicio de la Junta, la falta de una política de ese tipo incidió en la decisión de seleccionar a los miembros del equipo de liquidación de la UNAMID sin un examen comparativo. La Junta indicó que la misión había elaborado unas directrices sobre la separación del personal que en las que se establecía que se llevaría a cabo un examen comparativo durante la reducción del personal, según lo exigido. La Junta sostuvo que la UNAMID no había cumplido sus propias directrices sobre la separación del servicio. La administración consideró que la UNAMID había decidido la forma de integrar el equipo de liquidación con arreglo a una autoridad delegada por el Secretario General en la misión y no a través de la autoridad del departamento correspondiente, cuya función era consultiva. La Junta sostuvo que el alcance de la autoridad delegada en el Director de Apoyo a la Misión lo ponía en una posición difícil, ya que tenía que interactuar a diario con el personal cuyos nombramientos debía rescindir (*ibid.*, párrs. 98 a 100). En respuesta a sus preguntas, la administración informó a la Comisión Consultiva de que el examen comparativo solo se aplicaba a la fase de reducción de la UNAMID, y que el proceso de examen comparativo nunca se había utilizado para el establecimiento de un equipo de liquidación.

21. La Junta recomendó que la administración promulgara una política de reducción de recursos humanos para la reducción y la liquidación de las misiones (*ibid.*, párr. 95). La administración no aceptó esta recomendación y solicitó a la Junta que archivara las recomendaciones anteriores sobre la retención del personal superior durante la liquidación, ya que consideraba que no sería viable contar con una política centrada en conservar a los funcionarios hasta después de la fecha de liquidación y en velar por que los jefes de las dependencias sobre el terreno permanecieran en sus puestos y mantuvieran la responsabilidad respecto del cierre de sus dependencias. Al ser consultada al respecto, la administración, citando las disposiciones de la instrucción administrativa [ST/AI/2010/3](#) sobre el sistema de selección de personal, señaló que, si un candidato, incluido cualquier miembro del personal de una misión de mantenimiento de la paz o de una misión política especial, fuera seleccionado para una plaza en otro lugar de destino, habría que dejarlo ir dentro de un plazo de dos meses después de la notificación de la decisión sobre la selección y, si el candidato seleccionado no se presentara en el plazo especificado, se podría seleccionar a otro candidato de la lista para el puesto. La administración destacó además que no podía vulnerar el derecho de los funcionarios a solicitar plazas y ser seleccionados, y que el Departamento de Apoyo Operacional intervenía ante las entidades para negociar las fechas de cesión del personal superior. La administración informó a la Junta de que había adoptado medidas para mitigar los problemas de recursos humanos relacionados con las situaciones de reducción de personal, entre otras cosas mediante la publicación de orientaciones y el establecimiento de un mecanismo de capacidad de refuerzo (*ibid.*, párr. 97). En su informe sobre la aplicación de las recomendaciones de la Junta para 2020/21, el Secretario General también indicó que se estaba preparando una

política de reducción de personal ([A/76/723](#), párrs. 20 y 21). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la finalidad de la nueva política era determinar el orden de retención y facilitar la colocación del personal dentro y fuera de la entidad en proceso de reducción, y no garantizar la continuidad en el equipo de liquidación.

22. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la recomendación de la Junta de Auditores y recomienda que la Asamblea General solicite al Secretario General que, con carácter prioritario, le presente para su examen y aprobación la política de reducción de los recursos humanos para la reducción y la liquidación, y confía en que la política aborde, entre otras cosas, la cuestión de la salida prematura del personal superior de las misiones durante las fases de reducción y liquidación (véanse también [A/75/822](#), párr. 75, [A/74/737](#), párr. 60, y [A/73/755](#), párr. 75). La Comisión toma nota de las observaciones de la Junta sobre el uso de los procesos de examen comparativo para la selección de los equipos de liquidación y confía en que se lleven a cabo nuevas consultas con la administración para hacer frente a las preocupaciones de la Junta.

Prestación por peligrosidad

23. La Junta constató que la UNAMID pagaba prestación por peligrosidad a 66 funcionarios que trabajaban desde casa y, por tanto, no estaban presentes físicamente en la zona de la misión. Según lo dispuesto en la instrucción administrativa sobre la prestación por peligrosidad ([ST/AI/2020/6](#), párr. 6.1), esta prestación se paga a los funcionarios que reúnen los requisitos necesarios y que se encuentran en un lugar para el que se ha aprobado la prestación por peligrosidad. La Junta recomendó que la administración velara por el cumplimiento de la instrucción administrativa y por que la prestación por peligrosidad solamente se pagara a los funcionarios que estuvieran físicamente presentes en los lugares con derecho al pago de la prestación. La Junta también recomendó a la administración que estudiara la posibilidad de reclamar la prestación por peligrosidad concedida al personal que no cumplía las condiciones para el pago. La administración aceptó la recomendación y dijo que había aplicado la primera parte de la recomendación y que estaba haciendo todo lo posible para recuperar el sobrepago, estimado en 114.000 dólares ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 78 a 83). En respuesta a sus preguntas, se proporcionó a la Comisión Consultiva el siguiente cuadro sobre los derechos y las prestaciones que no se pagarían, en determinadas condiciones, cuando un funcionario se encontrara fuera del lugar de destino.

Motivos por los que no se pagan prestaciones y derechos cuando un funcionario no está presente en un lugar de destino

<i>Prestaciones y derechos</i>	<i>Motivos</i>
Prestación por movilidad, por condiciones de vida difíciles y por servicio en un lugar de destino no apto para familias	El funcionario se encuentra en situación de licencia especial sin sueldo o fuera del lugar de destino por motivos que no son vacaciones anuales ni un viaje oficial
Prestación por peligrosidad	
Descanso y recreación	El funcionario se encuentra fuera del lugar de destino
Evacuación médica	
Enfermedad o accidente durante un viaje oficial en comisión de servicios (apéndice D del Reglamento del Personal)	El funcionario está de licencia

<i>Prestaciones y derechos</i>	<i>Motivos</i>
Subsidio de alquiler	El funcionario ha rescindido el contrato de alquiler o el contrato de alquiler ha expirado y el funcionario no paga alquiler en el lugar de destino
Subsidio de educación y prestaciones conexas	El funcionario se encuentra en licencia especial sin sueldo o en el país de origen/lugar de vacaciones en el país de origen por motivos que no son vacaciones anuales ni un viaje oficial
Vacaciones en el país de origen	El funcionario se encuentra en licencia especial sin sueldo o en el país de origen/lugar de vacaciones en el país de origen por motivos que no son vacaciones anuales ni un viaje oficial
Viaje para visitar a la familia	
Prima de repatriación	

24. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la recomendación de la Junta sobre la prestación por peligrosidad y confía en que se proporcione a la Asamblea General información actualizada sobre la recuperación de los sobrepagos cuando esta examine el presente informe.

Indemnización por rescisión del nombramiento

25. La Junta constató que la UNAMID había ofrecido pagar una indemnización aumentada por rescisión del nombramiento a 187 funcionarios con nombramientos permanentes o continuos que iban a ser separados del servicio. Además, la misión había ofrecido pagar una indemnización excepcional por rescisión del nombramiento a 17 funcionarios que también tenían nombramientos permanentes y continuos y que iban a ser separados del servicio pero habían alcanzado la edad normal de jubilación. A cambio, los funcionarios firmarían memorandos de entendimiento en los que se comprometerían a no impugnar la separación del servicio y reconocerían que no podrían ocupar un puesto en las Naciones Unidas durante tres años. La Junta determinó que, al 11 de noviembre de 2021, se habían firmado 85 memorandos de entendimiento y estableció que, entre mayo y octubre de 2021, 88 funcionarios habían recibido una indemnización por rescisión del nombramiento. En total, las Naciones Unidas pagaron a los funcionarios 9,3 millones de dólares, incluidos 2,4 millones de dólares en indemnizaciones aumentadas por rescisión del nombramiento. La Junta indicó que, sobre la base de la cláusula 9.3 a) del Estatuto del Personal, el Secretario General puede rescindir el nombramiento de un funcionario titular de un nombramiento continuo cuando las necesidades del servicio exigen la supresión del puesto o la reducción del personal. La regla 9.6 e) del Reglamento del Personal establece un orden de retención, dando preferencia a los nombramientos continuos sobre otros tipos de nombramientos¹. De conformidad con la cláusula 9.3 d) del Estatuto del Personal, se puede conceder una indemnización aumentada por rescisión del nombramiento que no exceda en más del 50 % de la que se pagaría normalmente con arreglo al Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas cuando las circunstancias lo justifiquen ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 102, 105 y 106).

26. La Junta consideró que la decisión de la administración de pagar indemnizaciones aumentadas y excepcionales por rescisión del nombramiento no era lo más conveniente para la Organización. La información proporcionada por la Junta en su informe indica que

¹ De acuerdo con la regla 13.1 d) del Reglamento del Personal, se retendrá a los funcionarios con nombramientos permanentes con preferencia a los funcionarios con nombramientos de cualquier otro tipo (incluidos los nombramientos continuos).

los pagos se efectuaron debido a la dificultad de encontrar otros puestos a los funcionarios de la UNAMID que iban a ser separados de la Organización, y para evitar litigios. Sin embargo, la Junta sostuvo que la administración estaba obligada a buscar, no a encontrar, otros puestos adecuados. Según la Junta, si la administración pudiera demostrar que no había encontrado ningún otro puesto adecuado para un funcionario, la solicitud de evaluación de interna presentada por el funcionario o su recurso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas no tendrían ninguna posibilidad de prosperar. Además, la Junta estableció que se pagó el monto máximo de la indemnización aumentada por rescisión del nombramiento a todos los funcionarios que tenían un nombramiento permanente o continuo, sin analizar si el pago del monto máximo estaba justificado en cada caso. Con respecto a los funcionarios que habían alcanzado la edad normal de jubilación, la Junta consideró que, sobre la base de la regla 9.8 c) del Reglamento del Personal, no se debería pagar indemnización por rescisión del nombramiento a los funcionarios que, tras la separación del servicio, recibirían una prestación de jubilación conforme al artículo 28 de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (*ibid.*, párrs. 102 y 110 a 112).

27. La Junta recomendó que la administración: a) garantizara el cumplimiento del Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas para evitar el pago de indemnizaciones injustificadas después de esfuerzos exhaustivos para encontrar otra colocación a los funcionarios. y b) pagara una indemnización aumentada solamente después de haber examinado cada caso individualmente. La administración no aceptó la primera recomendación porque consideraba que existía la obligación de pagar una indemnización excepcional por rescisión del nombramiento a un funcionario con un nombramiento permanente o continuo que no hubiera alcanzado aún su edad normal de jubilación cuando se rescindiera el nombramiento. Según la administración, la Organización estaba legalmente obligada a respetar las fechas revisadas de finalización del nombramiento de los funcionarios mayores de 60 años cuyos nombramientos permanentes o continuos expirarían al cumplir la edad de separación obligatoria del servicio de 65 años, en lugar de a los 60 o 62 años, debido al aumento de la edad de separación obligatoria del servicio (*ibid.*, párrafos 114 a 121). Ante sus preguntas sobre el esfuerzo de colocación del personal, se informó a la Comisión Consultiva de que en mayo de 2021 la administración estableció un equipo de colocación en la Oficina de Recursos Humanos que logró colocar a 93 miembros del equipo de liquidación en diversas plazas dentro de la Organización.

28. La Comisión Consultiva toma nota de la recomendación de la Junta de que la administración garantice el cumplimiento del Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas para evitar el pago de indemnizaciones injustificadas después de esfuerzos exhaustivos para encontrar otra colocación a los funcionarios y está de acuerdo con la recomendación de que se pague una indemnización aumentada solamente después de haber examinado cada caso individualmente.

Gestión de la cadena de suministro

29. En su informe, la Junta observa varias deficiencias en la gestión de propiedades, planta y equipo, así como de las existencias de las operaciones de mantenimiento de la paz. Estas deficiencias estaban relacionadas con la determinación de los niveles de existencias, el exceso de existencias y de vehículos, la declaración de las existencias anticuadas como excedentes y la adquisición de artículos que ya se encontraban en existencias. La Junta sostuvo que las misiones debían fijar niveles de existencias, según lo indicado en el manual sobre las operaciones de almacenamiento centralizado. Si bien tomó nota de que la administración había establecido algunas medidas de eficiencia y tenía previsto poner en marcha otras medidas en el futuro para mejorar la gestión de las existencias, la Junta recomendó que se estableciera una función centralizada de análisis y

ejecución para: a) realizar análisis transversales de los elementos de propiedades, planta y equipo y las existencias en inventario de las misiones y los centros de servicios a fin de lograr economías de escala; b) detectar posibles excedentes de existencias y poner en marcha medidas correctivas; c) garantizar la gestión continua de la enajenación de activos; y d) eliminar las desventajas para las misiones y los centros de servicios ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 130 a 134). La administración aceptó la recomendación y fijó el tercer trimestre de 2024 como fecha límite para su aplicación ([A/76/723](#), párr. 26). La Comisión Consultiva observa que la Junta ha destacado repetidamente en sus informes anteriores la importancia de Umoja no solo como sistema para la presentación de informes financieros, sino para la gestión de otros procesos administrativos básicos, como la gestión de los recursos humanos o de la cadena de suministro ([A/75/5 \(Vol. II\)](#), párr. 101, [A/74/5 \(Vol. II\)](#), párr. 92, y [A/72/5 \(Vol. II\)](#), párr. 190).

30. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la recomendación de la Junta sobre la gestión de la cadena de suministro y recuerda que, en su resolución 75/242 B, la Asamblea General solicitó al Secretario General que siguiera reforzando la rendición de cuentas, la supervisión y los controles internos, incluso en los ámbitos de las adquisiciones y la gestión de activos en todas las misiones de mantenimiento de la paz.

B. Otras observaciones y recomendaciones

Fraude y presunción de fraude

31. La Junta indica que la Contraloría informó de 13 casos de fraude por un monto de 0,24 millones de dólares, frente a los 23 casos por un monto de 0,08 millones de dólares del período anterior. El Contralor también informó de 111 casos de presunto fraude por un total de 0,76 millones de dólares, frente a los 100 casos por un monto de 2,86 millones de dólares del período anterior ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 155 a 157 y cuadro II.4). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que en la lista de casos de fraude y presunto fraude no figuraba que se hubiera tomado ninguna medida correctiva para los 111 casos de presunto fraude y para 7 casos de fraude. También se informó a la Comisión de que, según la Junta, los cambios derivados del trabajo relativo a la declaración de control interno podrían mejorar la prevención del fraude.

32. La Comisión Consultiva reitera su preocupación por el número de casos de fraude y presunto fraude y reitera la necesidad de que el Secretario General haga más hincapié en las labores de concienciación y prevención, así como de que la Junta de Auditores siga examinando la cuestión en los informes que presente en el futuro (véase también [A/74/806](#), párr. 21). La Comisión confía en que se proporcione a la Asamblea General información sobre las sumas recuperadas cuando esta examine el presente informe.

Perspectivas

33. En su informe, la Junta de Auditores utiliza la experiencia del auditor principal saliente de las operaciones de mantenimiento de la paz, que formó parte de la Junta durante seis años, para dar su opinión sobre los siguientes ámbitos, que considera especialmente importantes para las operaciones de mantenimiento de la paz y que pueden requerir la adopción de medidas por parte de la administración en los próximos años:

a) **Gestión basada en los resultados y Umoja.** La Junta recuerda que Umoja se implantó en tres fases. En las dos primeras fases, Fundamentos de Umoja y Ampliación 1 de Umoja, se pusieron en marcha procesos administrativos. En la

tercera fase, Ampliación 2 de Umoja, se obtuvieron, entre otras cosas, las soluciones de planificación estratégica, presupuestación y gestión del desempeño. La Junta también recuerda que en su informe duodécimo y final sobre la marcha del proyecto de planificación de los recursos institucionales (A/75/386), el Secretario General afirmó que la reforma del presupuesto ordinario de la Secretaría, que ahora vincula el objetivo de cada subprograma a un conjunto de actividades y a los resultados, había impulsado el refuerzo de la gestión basada en los resultados. Sin embargo, el Secretario General señaló que las diferencias entre el presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz y el nuevo presupuesto ordinario en muchos aspectos, como los ejercicios presupuestarios, la estructuración de los marcos estratégicos, las categorías presupuestarias y las metodologías de presentación de informes sobre la ejecución, creaban varios problemas. La Junta considera que se necesita un esfuerzo concertado a nivel institucional, que incluya la implicación de los Estados Miembros, para reducir esta divergencia y mejorar el valor de Umoja (A/76/5 (Vol. II), cap. II, párrs. 140 a 143);

b) **Delegación de autoridad programática.** La Junta observa que en 2019, en el marco de la reforma de la gestión, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz dio a conocer la Política de Autoridad, Mando y Control en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Según la Junta, este documento proporciona una distribución genérica de responsabilidades respecto de la ejecución del mandato para las categorías inferiores a la de jefe de misión. Sin embargo, todavía no se ha publicado un boletín del Secretario General para el Departamento de Operaciones de Paz, que podría proporcionar más detalles sobre las autoridades programáticas y de ejecución de mandatos del Secretario General, el Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz y los jefes de misión, pese a haber transcurrido casi tres años de la aplicación de la reforma de la gestión. La Junta considera que no se ha aclarado la delegación de autoridad respecto de la ejecución del mandato. La administración ha señalado que los jefes de las entidades de mantenimiento de la paz son responsables de la ejecución del mandato de sus respectivas misiones, que se establecen en las resoluciones del Consejo de Seguridad, mientras que el Departamento de Operaciones de Paz proporciona a las misiones dirección y orientación estratégica, en particular para la traducción de los mandatos en marcos programáticos (*ibid.*, párrs. 144 a 146). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que se habían preparado los borradores de los boletines del Secretario General para el Departamento de Operaciones de Paz y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, que se estaban ultimando en forma conjunta, ya que era necesario que ambos borradores fueran exhaustivos y coherentes entre sí, en particular en relación con la estructura político-operacional regional única. Se prevé que los nuevos boletines revisados se promulgarán en 2022;

c) **Reforzar la primera y segunda líneas de defensa.** La Junta recuerda que el Secretario General destacó, en su séptimo informe sobre los progresos realizados en el sistema de rendición de cuentas, que se debía insistir más en el modelo de “tres líneas de defensa” para mejorar los sistemas de gestión de riesgos con el fin de aumentar la rendición de cuentas (A/72/773, párr. 41). La Junta acoge con beneplácito la introducción del modelo de tres líneas de defensa para aumentar la rendición de cuentas y observa que el modelo exige que los gestores de la primera línea de defensa y los directivos superiores de la segunda línea de defensa supervisen periódicamente las actividades administrativas y programáticas e informen de inmediato en casos de incumplimiento y mal desempeño (A/76/5 (Vol. II), cap. II, párrs. 147 y 148);

d) **Apoyo financiero para las operaciones de mantenimiento de la paz.** La Junta recuerda que las misiones de mantenimiento de la paz reciben apoyo del Centro Regional de Servicios de Entebbe, del Centro Mundial de Servicios y de diversos

departamentos de la Sede. En 2015, la Asamblea General confirió al Centro Regional de Servicios “independencia operativa y de gestión” y un presupuesto por separado (resolución 69/307, párr. 62). La Junta indica que el Centro de Servicios Generales también determina sus necesidades de recursos por medio de su propio presupuesto. La Junta considera que, desde que se llevó a cabo la reforma de la gestión en 2019, la estructura orgánica de las actividades de apoyo al mantenimiento de la paz ha cambiado. Ni el Centro Regional de Servicios ni el Centro Mundial de Servicios se consideran entidades según el marco revisado de delegación de autoridad. En marzo de 2020, la administración presentó un nuevo modelo de financiación que proponía la distribución de los costos entre el presupuesto ordinario y el presupuesto de mantenimiento de la paz para el Departamento de Apoyo Operacional y el Departamento de Estrategias, Políticas y Conformidad de la Gestión en función de la dotación total de personal. La Junta recomendó que la administración evaluara otros métodos, como el análisis del volumen de trabajo, para determinar el prorrateo de los gastos e incluyera a todas las demás entidades cofinanciadas con cargo a la cuenta de apoyo en el modelo de financiación (A/75/5 (Vol. II), cap. II, párrs. 77 a 84). La Junta observa que la Asamblea no tomó ninguna medida sobre el modelo de financiación propuesto (A/76/5 (Vol. II), cap. II, párrs. 149 a 152).

34. La Comisión Consultiva confía en que la administración haga un seguimiento estricto de las esferas que, según lo indicado por la Junta, son importantes para las operaciones de mantenimiento de la paz, y mantenga informada a la Asamblea General según corresponda.

III. Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores

A. Recomendaciones para el ejercicio 2020/21

35. La Junta formuló 10 recomendaciones para el ejercicio 2020/21, incluidas 3 recomendaciones que no fueron aceptadas y 7 recomendaciones que estaban en vías de aplicación y cuya fecha de aplicación estaba prevista entre el segundo trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2024 (A/76/723, cuadro 2). Como se indica en los párrafos 14, 22 y 28 del presente documento, las recomendaciones no aceptadas se refieren a la creación de un catálogo central de las actividades del Servicio de Actividades relativas a las Minas; la promulgación de una política de reducción de recursos humanos para las fases de reducción y liquidación como medio para retener al personal superior de la misión durante la liquidación; y la necesidad de cumplir el estatuto y reglamento del personal para evitar el pago de indemnizaciones injustificadas después de esfuerzos exhaustivos para encontrar otra colocación a los funcionarios.

B. Recomendaciones de ejercicios anteriores

36. La Junta indica que, durante el período que abarca el informe, seguían pendientes 89 recomendaciones de informes anteriores aprobadas por la Asamblea General. Al 30 de junio de 2021, 53 de esas recomendaciones se habían aplicado, 22 estaban en vías de aplicación, 9 no se habían aplicado y 5 habían sido superadas por los acontecimientos (A/76/5 (Vol. II), cap. II, párr. 9 y anexo II). En el informe del Secretario General se indicó que, al mes de febrero de 2022, 18 recomendaciones estaban en vías de aplicación y se había solicitado el archivo de 13 recomendaciones (A/76/723, cuadro 4). Al ser consultada, la administración confirmó que debe aplicar las recomendaciones de la Junta, que han sido aprobadas por la Asamblea General. Sin embargo, la administración consideraba que, en determinadas situaciones, podía

demostrar a la Junta que las cuestiones subyacentes se habían afrontado de forma diferente a lo indicado en las recomendaciones o que las recomendaciones habían sido superadas por los acontecimientos.

37. En su informe, la Junta destaca las siguientes cuestiones relativas a algunas de las recomendaciones que siguen pendientes:

a) En tres años no se han registrado avances en cuanto a los planes de trabajo y los exámenes de los objetivos, los procesos y las necesidades de personal de los equipos operacionales integrados. La Junta recuerda que, como indicó el Secretario General en 2010, los equipos operacionales integrados se encargaban de proporcionar asesoramiento y apoyo integrados de carácter operacional y político a las misiones sobre el terreno en relación con las cuestiones que se plantean a diario en las misiones, así como de coordinar las obligaciones del Secretario General en materia de presentación de informes al Consejo de Seguridad acerca de cuestiones específicas de las misiones ([A/65/669](#), párr. 5). En 2019, la Junta recomendó que la administración examinara los objetivos, los procesos y las necesidades de personal de los equipos operacionales integrados, teniendo en cuenta la nueva estructura de paz y seguridad que se implantaría próximamente. La Junta también recomendó que se actualizara la política relativa a los equipos operacionales integrados sobre la base del examen ([A/73/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 183 y 185). El plazo para la aplicación de estas recomendaciones se fijó inicialmente en 2019, luego se aplazó a 2020 y, en su último informe, el Secretario General indicó que el plazo revisado sería junio de 2022 ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 17, y [A/76/723](#), párrs. 47 y 49). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la administración había iniciado un examen de la gestión de los objetivos, los procesos y las necesidades de personal de los equipos operacionales integrados, que contarían con el apoyo de un consultor superior. Se espera que el informe de examen de la gestión incluya conclusiones y recomendaciones clave y proporcione una orientación departamental que aclare los objetivos, los procesos y las necesidades de personal de los equipos operacionales integrados;

b) Hace tres años que no se registran avances en el proceso de generación de fuerzas en Umoja. En 2019, la Junta recomendó que la administración tramitara el proceso de generación de fuerzas en Umoja ([A/73/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párr. 153). El Secretario General señaló que la administración crearía un grupo de trabajo integrado por representantes de los respectivos departamentos y del equipo de Umoja ([A/73/750](#), párr. 41). En 2020, el Secretario General señaló que el Departamento de Operaciones de Paz y el Departamento de Apoyo Operacional habían iniciado un grupo de trabajo para llevar a cabo un examen y elaborar una nota conceptual para la aplicación de la recomendación ([A/74/709](#), párrs. 197 y 198). Se informó a la Junta de que el plazo fijado por la administración para completar el proyecto (a más tardar en diciembre de 2023) era, en esa etapa, indicativo y se concretaría más a medida que se definieran el alcance y los requisitos ([A/76/5 \(Vol. II\)](#), cap. II, párrs. 19 a 21, y [A/76/723](#), párr. 45). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el grupo de trabajo interdepartamental estaba avanzando en la determinación del alcance y los requisitos adecuados para este complejo proyecto. También se informó a la Comisión de que el Sistema de Disponibilidad de Capacidades de Mantenimiento de la Paz era el único mecanismo que permitía seleccionar las unidades militares o de policía que se desplegarían y que este mecanismo tendría que incorporarse a Umoja;

c) No se ha creado una directriz para que se incluyan por norma indemnizaciones por daños y perjuicios en los contratos de los sistemas de aeronaves no tripuladas. En 2021, la Junta recomendó que, como norma, la administración incluyera en todos los contratos de sistemas de aeronaves no tripuladas disposiciones,

como la indemnización por daños y perjuicios, y que no renunciara a las reclamaciones relacionadas con los sistemas de aeronaves no tripuladas, como la indemnización por daños y perjuicios, sin que antes se hubieran registrado oficialmente las consideraciones y la autorización de un Subsecretario General (A/75/5 (Vol. II), párrs. 154 y 155). La administración consideró que era difícil determinar cuándo y cómo utilizar disposiciones de indemnización por daños y perjuicios u otros tipos de mecanismos de recuperación de costos en los contratos de las Naciones Unidas, y que dichas cláusulas no eran apropiadas para todos los contratos. La Junta sostiene que el Secretario General no ha cumplido la solicitud de la Asamblea General de aplicar las recomendaciones, aunque el Secretario General ha solicitado que las recomendaciones se archiven (A/76/5 (Vol. II), cap. II, párrs. 23 a 28, y A/76/723, párrs. 79 y 81). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la administración seguía considerando que la aplicación de las disposiciones de indemnización por daños y perjuicios en los contratos era discrecional y que, teniendo en cuenta el número de contratos gestionados por la administración, no sería práctico tener que recurrir a un Subsecretario General para solicitarle una exención respecto de un recurso discrecional en cada caso.

38. La Comisión Consultiva desea destacar las siguientes cuestiones adicionales relacionadas con las recomendaciones pendientes:

a) No ha habido avances en la gestión de las listas de preselección. En 2019, la Junta recomendó que modificara la política relativa a las listas de preselección con el fin de facilitar su creación y gestión y la limpieza de datos. En su informe más reciente, la Junta indica que la cuestión del sistema de selección de personal, incluidas las listas de preselección, se está debatiendo en el Comité del Personal y la Administración y que los cambios en la política y las cuestiones operacionales relacionadas con la gestión de las listas, incluida la limpieza de datos, deberían aplicarse en diciembre de 2022 (A/76/5 (Vol. II), cap. II, anexo II, y A/76/723, párrs. 55 y 56);

b) Se siguen corrigiendo los errores en los datos para la valuación del pasivo en concepto de seguro médico posterior a la separación del servicio. En 2020, la Junta recomendó que se corrigieran los datos erróneos de servicio y afiliación del personal para la valoración de los pasivos en concepto de seguro médico posterior a la separación del servicio. La Junta estima que la recomendación sigue en vías de aplicación, mientras que el Secretario General considera que se ha aplicado y solicita que se archive (A/76/5 (Vol. II), cap. II, anexo II, y A/76/723, párr. 59). En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que, para la valoración de 2021, la Secretaría utilizó tanto las fechas de ingreso como los períodos de afiliación en los planes de seguro médico de las Naciones Unidas, que son más exactos y pertinentes para la valoración. De los aproximadamente 33.000 registros de personal en activo que figuran en los datos del censo, la Secretaría pudo sustituir la fecha de ingreso por los períodos de afiliación en los planes de seguro médico de las Naciones Unidas de casi 14.000 funcionarios; comprobar que 2.000 funcionarios no tenían derecho a seguro médico posterior a la separación del servicio; y determinar que 13.000 funcionarios tenían derecho al Plan de Seguro Médico, cuyos datos de afiliación coinciden con la fecha de ingreso. Para la valoración de 2023, la Secretaría determinará los datos históricos de afiliación de los participantes en el Plan de Seguro Médico para seguir mejorando la valoración del pasivo en concepto de seguro médico posterior a la separación del servicio.

39. **La Comisión Consultiva observa con preocupación la falta de progreso en la aplicación de las recomendaciones aprobadas por la Asamblea General. La Comisión recuerda que la Asamblea ha solicitado en repetidas ocasiones al Secretario General que asegure la plena aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores en forma rápida y oportuna y que presente una explicación**

exhaustiva de los retrasos en la aplicación de las recomendaciones de la Junta que aún estén pendientes, las causas fundamentales de los problemas recurrentes y las medidas que deben adoptarse al respecto (resolución [75/242](#) B, párrs. 7 y 10; véanse también [A/75/829](#), párr. 57, y [A/74/806](#), párrs. 22, 24 y 27).

IV. Conclusión

40. La Comisión Consultiva reafirma que las conclusiones presentadas anualmente por la Junta de Auditores en sus informes de auditoría constituyen un pilar esencial del marco de supervisión de la Organización, contribuyen a garantizar el cumplimiento del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, el Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas y otras políticas de las Naciones Unidas, y representan un valioso instrumento para mejorar la gestión, la eficiencia y la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz (véanse también [A/75/829](#), párr. 59, y [A/74/806](#), párr. 28).
